



SALA UNIPERSONAL DE DECISIÓN CIVIL

PROCESO	Ejecutivo con garantía real
DEMANDANTE	Manuel Segundo Polo Ochoa
DEMANDADOS	Fabián Adolfo Sierra Cardona y Sandra Yasmith Lopera García
RADICADO	05001 31 03 009 2022 00002 01
DECISIÓN	Confirma auto apelado

Medellín, treinta de junio de dos mil veintitrés

El Despacho resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, en el asunto de la referencia.

ANTECEDENTES

- 1.1. En providencia de 08 de noviembre de 2022, el Juzgado 009 Civil del Circuito de Medellín consideró procedente y decretó por solicitud de la parte ejecutante la medida cautelar de embargo de los bienes inmuebles identificados con matrícula inmobiliaria No. 012-17310 de la ORIP de Girardota, 025-26863 y 025-26865 de la ORIP de Santa Rosa de Osos de propiedad de Fabián Adolfo Sierra Cardona.
- 1.2. Inconforme con la decisión, el extremo procesal accionado presentó recurso de reposición y en subsidio apelación. Como cimientto de lo anterior, adujo que el monto de las pretensiones ascendía a \$500 000 000, ello aunado a que, el avalúo presentado por la parte demandada del inmueble objeto de gravamen hipotecario era de \$907 886 235, por lo cual, el monto de los bienes embargados excedía lo autorizado por la ley según el artículo 600 del Código General del Proceso.
- 1.3. Surtido el traslado respectivo sin pronunciamiento de la contraparte, el despacho de primer nivel en proveído de 18 de mayo de 2023 resolvió el recurso de reposición de manera desfavorable y concedió la alzada.

Como sustento de lo precedente, tuvo en cuenta la normativa que regula el decreto y límites de las medidas cautelares, para evitar que estas se desborden o resulten excesivas. Al respecto, el inciso 3 del artículo 599 del C.G.P. dispone que al decretar los embargos y secuestros el juez podrá limitarlos a lo necesario; el valor de los bienes no podrá ser superior del doble de la acreencia cobrada, sus intereses y las costas calculadas prudencialmente. Conforme con lo anterior, advirtió que se ejecuta dos letras de cambio, la primera por un valor de \$800 000 000 y la segunda por \$200 000 000, es decir, que lo adeudado como capital ascendía a \$1 000 000 000, por lo que no el recurrente no tiene razón al indicar que \$500 000 000 era la suma pretendida. Frente a la proporcionalidad de las cautelas, explicó que en la etapa prematura del decreto de medidas cautelares, es decir, previo a notificar la demanda o con la admisión de la misma o su equivalente, en el mandamiento de pago se considera el capital y el interés de mora reclamado cuando se formuló la demanda y la cautela; entonces conforme con las letras de cambio el interés de mora es la tasa máxima legal, de acuerdo con la variación mensual, con fundamento en el artículo 111 de la Ley 510 de 1999, causados desde el 16 de diciembre de 2021 (fecha de presentación de la demanda con ocasión de la cláusula acceleratoria acordada en el otro sí del contrato de mutuo) y hasta el pago total de la obligación, se aumenta el valor a recaudar y, también las costas en caso de una condena. En consecuencia, calculadas prudencialmente dichas cifras, se tiene que el valor excede de mil millones, y, el legislador permite al juez decretar los embargos sin exceder el doble.

En este caso en concreto el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 001-411103 se encuentra avaluado en \$598 380 200, empero los demandados aportaron un nuevo avalúo de \$907 886 235 sobre ese bien, suma que aún resulta insuficiente para cubrir el monto del capital de lo adeudado. Respecto del inmueble con M.I. No. 025-26863 recae una limitación al dominio por constitución de patrimonio familiar, circunstancia que permite perseguir otros bienes. Ahora, según el recurrente el valor de bienes afectados asciende a la \$907 886 235, cifra que, sin embargo, no supera el límite del capital reclamado y menos aún con los intereses de mora y las costas. Tampoco sobrepasa el límite del doble de estos conceptos, pues el solo capital es de mil millones y el doble sería \$2 000 000 000.

1.4. Posteriormente, la parte demandada amplió la sustentación del recurso de apelación y expuso que los títulos valores respaldan un contrato de mutuo suscrito el 17 de febrero de 2020 y un otrosí de 21 de junio de 2021, que si bien es cierto que el valor consignado en los mismos es de \$1 000 000 000, la suma entregada solo fue de \$500 000 000, circunstancia que puede constatarse con la respuesta emitida por el Banco de Bogotá que obra en el plenario. Sumado a lo anterior, afirmó que el artículo 600 del C.G.P. establece que en cualquier estado del proceso la parte demandada podrá solicitar la reducción de las medidas cautelares, en caso de considerar que las mismas son excesivas. Por lo tanto, insistió en que los inmuebles embargados exceden el doble valor de la obligación adeudada, sus intereses y las costas prudencialmente calculadas.

CONSIDERACIONES

2.1. El artículo 599 enseña sobre las medidas cautelares en los procesos ejecutivos:

"ARTÍCULO 599. EMBARGO Y SECUESTRO. Desde la presentación de la demanda el ejecutante podrá solicitar el embargo y secuestro de bienes del ejecutado.

Cuando se ejecute por obligaciones de una persona fallecida, antes de liquidarse la sucesión, sólo podrán embargarse y secuestrarse bienes del causante.

El juez, al decretar los embargos y secuestros, podrá limitarlos a lo necesario; el valor de los bienes no podrá exceder del doble del crédito cobrado, sus intereses y las costas prudencialmente calculadas, salvo que se trate de un solo bien o de bienes afectados por hipoteca o prenda que garanticen aquel crédito, o cuando la división disminuya su valor o su venalidad.

En el momento de practicar el secuestro el juez deberá de oficio limitarlo en la forma indicada en el inciso anterior, si el valor de los bienes excede ostensiblemente del límite mencionado, o aparece de las facturas de compra, libros de contabilidad, certificados de catastro o recibos de pago

de impuesto predial, o de otros documentos oficiales, siempre que se le exhiban tales pruebas en la diligencia.

En los procesos ejecutivos, el ejecutado que proponga excepciones de mérito o el tercer afectado con la medida cautelar, podrán solicitarle al juez que ordene al ejecutante prestar caución hasta por el diez por ciento (10%) del valor actual de la ejecución para responder por los perjuicios que se causen con su práctica, so pena de levantamiento. La caución deberá prestarse dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del auto que la ordene. Contra la providencia anterior, no procede recurso de apelación. Para establecer el monto de la caución, el juez deberá tener en cuenta la clase de bienes sobre los que recae la medida cautelar practicada y la apariencia de buen derecho de las excepciones de mérito.

La caución a que se refiere el artículo anterior, no procede cuando el ejecutante sea una entidad financiera o vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia o una entidad de derecho público.

Cuando se trate de caución expedida por compañía de seguros, su efectividad podrá reclamarse también por el asegurado o beneficiario directamente ante la aseguradora, de acuerdo con las normas del Código de Comercio.

PARÁGRAFO. El ejecutado podrá solicitar que de la relación de bienes de su propiedad e ingresos, el juez ordene el embargo y secuestro de los que señale con el fin de evitar que se embarguen otros, salvo cuando el embargo se funde en garantía real. El juez, previo traslado al ejecutante por dos (2) días, accederá a la solicitud siempre que sean suficientes, con sujeción a los criterios establecidos en los dos incisos anteriores.”(Subraya fuera de texto).

2.2. En relación con los límites de la medida cautelar de embargo, la Corte Suprema de Justicia en Sentencia STC19598 de 2017 precisó:

"En ese sentido, refulge el embargo como una forma de garantizar la eficacia de las acciones del accipiens contra los actos del moroso, quien distrayendo o gravando sus haberes merme y hasta haga desaparecer el

respaldo de sus obligaciones¹, función que cumple restringiendo el poder dispositivo del titular del derecho, "(...) el cual pasa temporalmente a manos del juez, en procura de protección, las más de las veces, de los acreedores"².

Justamente,

"Los acreedores de un deudor personal, tienen a su favor la prenda genérica de los bienes de su deudor, sean presentes o futuros, exceptuándose los no embargables, según el artículo 2488 del Código Civil.

...

Se garantiza así el derecho de los acreedores, quienes tienen el interés para asegurarse en esa forma de la efectividad de sus acreencias, embargando, sacando fuera del comercio los bienes del deudor y evitando en esa forma que éste se insolvente"³.

...

La Corte, en procura siempre de la tutela y garantía de los derechos subjetivos de los asociados, más aún, de las prerrogativas que le asisten al deudor moroso, ejecutado, ha hecho, de antaño, especial hincapié en la prudencia que el ejecutante debe observar en el ejercicio de las facultades propias de esa calidad, que aun cuando legítimas pueden –eventualmente– ser abusivas.

En constante y reiterada doctrina⁴, desde 1935 la Sala, con estribo en el entonces vigente Código Judicial, ha insistido:

¹ CSJ. SC. Sentencia de 12 de mayo de 1938. En similar sentido: CSJ. SC. Sentencia de 12 de diciembre de 1944.

² CSJ. SC. Sentencia de 4 de febrero de 2013. Véase también, sobre este punto: CSJ. SC. Sentencia de 24 de junio de 1997.

³ CSJ. SC. Sentencia de 4 de agosto de 1958.

⁴ La **teoría del abuso del derecho**, en el particular ámbito de las **acciones procesales y en estricta relación con la tutela cautelar en ellas dispensada**, ha sido desarrollada por la Corte, esencialmente, en los siguientes fallos, todos proferidos en sede de casación: CSJ. SC. Sentencias de 30 de octubre de 1935; de 9 de abril de 1942; de 27 de mayo de 1964; de 11 de octubre de 1973; de 2 de diciembre de 1993; de 2 de agosto de 1995; de 27 de noviembre de 1998; de 25 de febrero de 2002; de 14 de febrero de 2005; y de 28 de abril de 2011.

"El Código judicial al no autorizar el embargo y secuestro de bienes sino en la cantidad suficiente para seguridad del pago (artículo 274 inciso 1º), al permitir la reducción del secuestro en el exceso que se compruebe (artículo 283), al exigir fianza previa al acto del embargo (artículo 274 inciso 3º), para asegurar al verdadero dueño de los bienes el reembolso de los posibles perjuicios, y no ya solamente de las costas, y al sancionar la temeridad del embargo y del secuestro con una multa de diez a mil pesos (artículo 1021), en todos esos casos el código muestra claramente su intención de castigar el dolo y la culpa lata equiparada a él, lo cual no es otra cosa que la sanción del abuso del derecho a litigar, caracterizado, en aquellos concretos ejemplos, con el propósito de perjudicar a otro privando al propietario por tiempo indeterminado del ejercicio y goce legítimos de sus derechos de administrar, gozar y enajenar sus bienes, sin que con las referidas medidas judiciales haya utilidad para el ejecutante, porque, no resultando ser de su deudor los bienes, no conseguirá reducirlos a dinero mediante el remate, que es la finalidad del juicio ejecutivo, y excediendo evidentemente la cuantía de los bienes embargados y secuestrados a la proporción del crédito que se persigue, ese exceso, de cuya disponibilidad se priva al deudor, no es un medio innecesario sino inútil para la satisfacción del derecho del acreedor".⁵

El precedente recién extractado, y otros varios que lo confirman y amplían, se apoyan en el criterio de proporcionalidad o razonabilidad, orientador del sistema de las medidas cautelares estatuido en el ordenamiento procesal.

No otra es la filosofía que inspira a las disposiciones contenidas en los artículos 599 (incs. 3 y 4) y 600 (inc. 1) del actual Código General del Proceso⁶, que, en forma clara y terminante, preceptúan, la primera:

"(...) El juez, al decretar los embargos y secuestros, podrá limitarlos a lo necesario; el valor de los bienes no podrá exceder del doble del

⁵ CSJ. SC. Sentencia de 30 de octubre de 1935.

⁶ Idénticas, en su esencia, a las consignadas en las reglas 513 (inc. 8) y 517 (incs. 1 y 2) del Código de Procedimiento Civil.

crédito cobrado, sus intereses y las costas prudencialmente calculadas (...)."

"En el momento de practicar el secuestro el juez deberá de oficio limitarlo en la forma indicada en el inciso anterior, si el valor de los bienes excede ostensiblemente el límite mencionado, o aparece de las facturas de compra, libros de contabilidad, certificados de catastro o recibos de pago de impuesto predial, o de otros documentos oficiales, siempre que se le exhiban tales pruebas en la diligencia" (incs. 3 y 4 art. 599 C.G.P.).

Y la segunda,

"En cualquier estado del proceso una vez consumados los embargos y secuestros, y antes de que se fije fecha para remate, el juez, a solicitud de parte o de oficio, cuando con fundamento en los documentos señalados en el cuarto inciso del artículo anterior considere que las medidas cautelares son excesivas, requerirá al ejecutante para que en el término de cinco (5) días, manifieste de cuáles de ellas prescinde o rinda las explicaciones a que haya lugar. Si el valor de alguno o algunos de los bienes supera el doble del crédito, sus intereses y las costas prudencialmente calculadas, decretará el desembargo de los demás (...)" (inc. 1º art. 600 C.G.P.)."

2.3. Por su parte, el artículo 600 del estatuto procesal prevé la figura de reducción de embargos:

"ARTÍCULO 600. REDUCCIÓN DE EMBARGOS. En cualquier estado del proceso una vez consumados los embargos y secuestros, y antes de que se fije fecha para remate, el juez, a solicitud de parte o de oficio, cuando con fundamento en los documentos señalados en el cuarto inciso del artículo anterior considere que las medidas cautelares son excesivas, requerirá al ejecutante para que en el término de cinco (5) días, manifieste de cuáles de ellas prescinde o rinda las explicaciones a que haya lugar. Si el valor de alguno o algunos de los bienes supera el doble del crédito, sus intereses y las costas prudencialmente calculadas, decretará el desembargo de los demás, a menos que estos sean objeto de hipoteca o

prenda que garantice el crédito cobrado, o se perjudique el valor o la venalidad de los bienes embargados.

Cuando exista embargo de remanente el juez deberá poner los bienes desembargados a disposición del proceso en que haya sido decretado.”

CASO CONCRETO

En el caso bajo examen, el recurso formulado plantea resolver si el juez de primer grado tuvo razón al decretar el embargo de los inmuebles identificados con matrícula inmobiliaria No. 012-17310 de la ORIP de Girardota, 025-26863 y 025-26865 de la ORIP de Santa Rosa de Osos de propiedad de Fabián Adolfo Sierra Cardona, decisión frente a la cual se formuló recurso que se traduce en realidad en una solicitud de reducción de embargo. No obstante, de conformidad con el artículo 600 del Código General del Proceso, dicha petición resulta prematura en esta etapa procesal, porque debe hacerse una vez que los embargos se encuentren consumados y hasta antes de que se fije fecha para remate.

En tal sentido, nótese que, en el auto de 27 de enero de 2022 mediante el cual se libró mandamiento de pago, la orden fue emitida en virtud de dos títulos valores (letras de cambio), la primera por un valor de \$800 000 000 por concepto de capital, más los intereses moratorios liquidados a la tasa máxima legal, causados desde el 16 de diciembre de 2021 (fecha de presentación de la demanda), y la segunda por un valor de \$200 000 000 por concepto de capital, más los intereses moratorios liquidados a la tasa máxima legal, causados desde el 16 de diciembre de 2021. De otro lado, se observa que, en esa misma fecha, el juzgado decretó el embargo del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 001-411103 de la ORIP de Medellín, Zona Sur denunciado como de propiedad de Sandra Yasmith Lopera García, frente a ese bien, la parte ejecutante aportó un avalúo comercial de \$598 380 200 (archivo No. 03.07 cuaderno principal expediente digital); posteriormente, la parte demandada aportó un avalúo del mismo inmueble por valor de \$907 886 235 (archivo 08.3 cuaderno principal expediente digital). Por otra parte, en relación con el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 025-26863 de la ORIP de Santa Rosa de Osos, se observa que los demandados aportaron un avalúo que define un valor del predio de \$2 435 283 324 (archivo 12.1 cuaderno medidas

cautelares expediente digital), así mismo consta, en la anotación No. 10 del certificado de libertad y tradición de dicho bien, una limitación al dominio por constitución de patrimonio de familia (archivo 03.10 cuaderno principal expediente digital). Por último, frente al inmueble con M.I. No. 025-26865 el avalúo señala que el precio es de \$1 646 006 760 (archivo 12.1 cuaderno medidas cautelares expediente digital); pero en lo atinente al inmueble con M.I. No. 012-17310 no hay certeza sobre el valor que tiene porque en el plenario no obra avalúo al respecto.

Ahora, mediante la inconformidad expuesta, la parte demandada pretende atacar el decreto de medidas cautelares con fundamento en que exceden el límite previsto en el artículo 599 del estatuto procesal; sin embargo, sin entrar a determinar si los bienes inmuebles afectados con las cautelas exceden o no el doble del crédito cobrado, sus intereses y las costas prudencialmente calculadas, se evidencia la necesidad de que ese análisis se lleve a cabo de acuerdo con lo anunciado en el artículo 600 ibídem, es decir, cuando los embargos se encuentren consumados y hasta antes que se fije fecha para remate. Entre tanto, corresponde a esta instancia confirmar, por las razones expuestas, la providencia apelada.

Por lo expuesto, el Despacho RESUELVE:

PRIMERO. CONFIRMAR la decisión adoptada en auto de 8 de noviembre de 2022, proferida por el Juzgado 009 Civil del Circuito de Medellín, por las razones expuestas.

SEGUNDO. Sin condena en costas porque no se causaron.

NOTIFÍQUESE



MARTHA CECILIA LEMA VILLADA
Magistrada